



HONDURAS 2022

LOS RETOS DE LA GOBERNABILIDAD EN EL CONTEXTO POSELECTORAL

Leticia Salomón*

17 de marzo de 2022

Resumen

El golpe de Estado de 2009 en Honduras produjo una interrupción del proceso de transición a la democracia y propició un proceso de confrontación ideológica que dividió a la sociedad hondureña en dos bandos. A partir de ahí, cuatro fenómenos se intensificaron en la vida política y social del país: la corrupción, el irrespeto a la ley, la impunidad y la politización partidaria de las instituciones, los cuales se evidenciaron con mayor fuerza en los ocho años del mandato del entonces presidente Juan Orlando Hernández (2014-2018 y 2018-2022). Por la intensidad de los acontecimientos en el mes de febrero de 2022, daba la impresión de que el país vivió, y vive todavía, una especie de transición caótica, alimentada por la existencia de fenómenos confrontados o, en el mejor de los casos, con lógicas diferentes que acentúan la tensión en diversos aspectos de la vida política y social del país. De esta manera podemos observar las siguientes tensiones: lo viejo y lo nuevo, lo urgente y lo importante, lo político y lo social, lo interno y lo externo, partido y gobierno, partido gobernante y partidos no gobernantes, poder ejecutivo y poder legislativo, presidenta entrante y presidente saliente, presidenta y esposo de la presidenta.

Introducción

Honduras inició en 1982 la transición a la democracia en un contexto regional de crisis centroamericana y un contexto internacional de Guerra Fría; ambos hechos condicionaron la transición y la redujeron a una cuestión estrictamente electoral, según la cual los partidos políticos tradicionales, Liberal y Nacional, comenzaron

a alternarse en el ejercicio de la presidencia sin mayores problemas hasta el golpe de Estado de junio de 2009, cuando una alianza política, empresarial y militar, con el apoyo de los medios de comunicación corporativos y las cúpulas religiosas, decidieron sacar ilegalmente del gobierno y del país al presidente Manuel Zelaya Rosales (2006-2010), en ese entonces del partido Liberal, pese a que no existía ni existe en el país la revocatoria de mandato.

El golpe de Estado polarizó a la sociedad hondureña, primero, entre los que estaban a favor y los que estaban en contra del presidente derrocado, y luego, entre los que estaban a favor y en contra del golpe

* Socióloga y economista hondureña, investigadora asociada del Centro de Documentación de Honduras (CEDOH) en temas de gobernabilidad, defensa y seguridad; exintegrante del Comité Directivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO); excoordinadora del Consejo de Investigación del Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA); y exdirectora de Investigación Científica y Posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).



de Estado y del retroceso político e ideológico que revivió el anticomunismo de la Guerra Fría, la presencia represiva de militares y policías, y la manipulación ideológica de las iglesias, en particular de las evangélicas.

A partir de entonces, cuatro fenómenos se intensificaron en la vida política y social del país: la corrupción, el irrespeto a la ley, la impunidad y la politización partidaria de las instituciones. Esto incluyó el gobierno de facto de Roberto Micheletti (2009), el primer gobierno del partido Nacional, de Porfirio Lobo Sosa (2010-2014) y los siguientes dos gobiernos del mismo partido y el mismo presidente, Juan Orlando Hernández (2014-2018 y 2018-2022). Su triunfo en las elecciones de 2017, con señalamientos de fraude a nivel nacional e internacional, y con una reelección prohibida por la Constitución de la República, acentuó la fragilidad institucional y puso en evidencia la debilidad del Estado de derecho y el control político directo sobre los otros poderes del Estado —el legislativo y el judicial— además del Ministerio Público (Procuraduría, en otros países), los cuales no iniciaron ninguna investigación y tampoco una acusación penal.

La resistencia popular contra el golpe de Estado, que estuvo presente con intensidad creciente en 2009, se convirtió posteriormente en el partido Libertad y Refundación (LIBRE) como producto de las negociaciones para restaurar la normalidad democrática después del golpe, participando como tal en las elecciones de 2013, 2017 y 2021, a lo cual se sumaron otros partidos menores que llegaron a un

número de 14 en las elecciones de noviembre de 2021.

El contexto electoral de 2021

La reacción social en contra del entonces presidente, Juan Orlando Hernández, por la dimensión de la corrupción, la represión de la protesta social y de los luchadores contra el extractivismo, y su señalamiento en las cortes de Nueva York por vínculos con el narcotráfico, fue dinamizando la consigna “Fuera JOH”, que evidenciaba la demanda social de sacarlo del gobierno y, de ser posible, del país, para ir a enfrentar a la justicia en Estados Unidos¹, ya que su control sobre el sistema de justicia hondureño impedía iniciativas autónomas para iniciar procesos judiciales en su contra. La consigna seguía siendo válida pese a que el candidato del partido de gobierno en las elecciones generales de 2021 era el alcalde de la capital, dada la imposibilidad legal, política y social de que aquel volviera a lanzar su candidatura.

La demanda social no pareció coincidir con la respuesta político-partidaria de 2021, pues los partidos políticos que no eran gobierno en ese entonces decidieron ir separados a las elecciones generales, con lo cual se alejaba la posibilidad de concretar la consigna que agitó a la oposición durante los últimos años. En un arreglo político de última hora, muy oportuno coyunturalmente, y bastante atinado electoralmente, LIBRE —partido de centroizquierda, coordinado por el expresi-

¹ Nota de edición: a fecha 16 de marzo de 2022, un juez de Honduras ha autorizado que el expresidente pueda ser extraditado a EE.UU. por cargos asociados al narcotráfico (ver: <https://www.ft.com/content/4cb5a8b1-a4d1-4b2e-83cf-9009d51c4f7d>).



dente Manuel Zelaya Rosales—, decide aliarse con un partido de centroderecha, de reciente creación, Salvador de Honduras (PSH) y con uno muy pequeño, el Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (PINU-SD), e ir juntos en el nivel presidencial llevando como candidata a Xiomara Castro, esposa del expresidente Zelaya quien demostró su potencialidad política en la lucha de la resistencia en 2009 para restituir al presidente derrocado.

Dado el fuerte control de Juan Orlando Hernández sobre la clientela electoral impulsada por la politización partidaria del asistencialismo estatal y el manejo de cantidades millonarias para movilizarla en las semanas y días inmediatos a las elecciones generales —sumado a toda una experiencia en fraude electoral, como se había evidenciado en las elecciones anteriores—, era muy importante asegurar un triunfo contundente para evitar que el mismo se revirtiera con cualquier maniobra fraudulenta de última hora. Y el triunfo se produjo, resultó contundente y sin posibilidades de reversión: casi medio millón de votos más que el partido Nacional con una relación porcentual de 51,12% frente a 36,93%. No obstante, a nivel del poder legislativo (Congreso Nacional), el triunfo fue menos contundente. En él, LIBRE se constituyó en la principal fuerza partidaria, pero la alianza no alcanzó los votos necesarios para la mayoría simple y menos para mayoría calificada: el Congreso Nacional hondureño está conformado por 128 diputaciones, de las cuales 50 son de LIBRE, 44 del partido Nacional, 22 del partido Liberal, 10 del PSH, 1 del Partido Anticorrupción y 1 del partido Demócrata Cristiano.

La coyuntura política al inicio de 2022

La toma de posesión de la presidenta Xiomara Castro (2022-2026) el 27 de enero, representa la restauración de la esperanza de amplios sectores de la población que confían en que la nueva mandataria, la primera mujer en la historia del país, revertirá la estructura de impunidad que sostuvo al expresidente Hernández; derogará muchas leyes que comprometieron la soberanía nacional, los derechos humanos, la transparencia en el manejo del presupuesto, el castigo a los corruptos, el saqueo de las instituciones del Estado y la criminalización de los defensores del ambiente, entre otras; y confían en que se abrirán las posibilidades de una mejoría económica que les permita atender sus necesidades más elementales y ver con más esperanza el futuro inmediato.

No obstante, este inicio se vio empañado por una crisis al interior del partido LIBRE que impactó en el Congreso Nacional y que se tradujo en la existencia de dos juntas directivas sesionando, debatiendo al mismo tiempo y en lugares diferentes. Esta situación, que se prolongó durante varios días, mostró una fisura en el nuevo partido de gobierno cuando un grupo de 20 diputados desconoció un compromiso de campaña que otorgaba al PSH la presidencia del Congreso, y decidieron asumir dicha presidencia, negociando para ello con el partido Nacional que gobernó el país en los últimos 12 años y es responsable de la situación crítica en la que se encuentra en este momento.

La crisis se superó con la intervención del expresidente Zelaya como coordinador del partido. Los diputados disidentes de

LIBRE terminaron incorporándose al partido, del que fueron expulsados en los momentos de confrontación inicial, y al Congreso, al igual que los otros partidos, como el Nacional, que quiso capitalizar la crisis de ese partido para obtener mejores condiciones para negociaciones futuras, en particular para la elección de la presidencia del Congreso, de los 15 magistrados que integrarán la Corte Suprema de Justicia y, posteriormente, de las dos figuras máximas del Ministerio Público: el fiscal general y el fiscal general adjunto.

Por la intensidad de los acontecimientos en el mes de febrero, daba la impresión de que el país vivió, y vive todavía, una especie de transición caótica, alimentada por la existencia de fenómenos confrontados o, en el mejor de los casos, con lógicas diferentes que acentúan la tensión en diversos aspectos de la vida política y social del país. De esta manera, podemos observar las siguientes tensiones: lo viejo y lo nuevo, lo urgente y lo importante, lo político y lo social, lo interno y lo externo, partido y gobierno, partido gobernante y partidos no gobernantes², poder ejecutivo y poder legislativo, presidenta entrante y presidente saliente, presidenta y esposo de la presidenta.

La cuantía y significado de las demandas acumuladas y reflejadas adecuadamente en el plan de gobierno de LIBRE y de la

alianza con la que llegó al gobierno, así como tantos años de espera y de frustraciones, ha producido una presión muy fuerte para que se tomaran decisiones y se empezara a revertir el andamiaje perverso que se levantó en los dos gobiernos del exmandatario Hernández. Aunque la presidenta apenas ha cumplido mes y medio de mandato —ni siquiera los 100 días que se acostumbran en una transición de este tipo—, la gente ya quiere ver resultados concretos; esto ha producido un conjunto de iniciativas, coincidentes unas, divergentes otras, entre los poderes ejecutivo y legislativo, lo que se ha traducido en una proliferación de medidas adoptadas, leyes aprobadas/derogadas y personas nombradas, que da la impresión de que se están atendiendo cosas urgentes, pero las cuestiones importantes no han sido abordadas con la misma presión y celeridad.

Para el caso, y en relación con el desmontaje de la estructura de impunidad, corrupción y narcotráfico —sobre la cual se sostuvo el gobierno anterior—, se ha creado un nuevo cargo, el de ministro asesor en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción, al frente del cual se encuentra el primer fiscal general de la República, Ángel Edmundo Orellana Mercado. Su objetivo principal es coordinar la instalación en el país de una comisión internacional de combate a la corrupción. A la vez, en el Congreso Nacional se ha creado una comisión legislativa de combate a la corrupción que puede convertirse en una comisión paralela a la del ejecutivo. Hay que considerar, sobre todo, que el Congreso Nacional será donde se apruebe la ley correspondiente a la instalación de la comisión internacional de combate a la corrupción, tras la cancelación

² El término “partidos no gobernantes” sustituye en este caso al término “partidos de oposición”, dada la tradición de varios partidos, entre ellos el partido Liberal y otros pequeños, de trabajar en alianza de hecho con el partido gobernante, en este caso el Nacional, el cual estuvo al frente del gobierno entre 2010 y 2022. Durante ese tiempo únicamente el partido LIBRE ejerció su papel opositor.

lación en 2020, y por esa misma instancia, de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH), fruto de la presión de las redes de corrupción que siguen presentes en ese poder del Estado.

Por otro lado, el vaciamiento de las arcas públicas y la escasa disponibilidad del presupuesto, hasta para cubrir los gastos de funcionamiento mínimo del Estado, ha hecho que la capacidad presupuestaria se convierta en un asunto de atención urgente para el ejecutivo y el legislativo. Asimismo, lo es el tratamiento de la reestructuración de la deuda para liberar fondos, la reforma de la recaudación tributaria y la definición de las prioridades del nuevo presupuesto, posponiendo coyunturalmente planes del gobierno previstos previamente.

Así, el nuevo gobierno se ha visto obligado a readecuar sus ejes de trabajo, propuestos en las pasadas elecciones, dada la situación de urgencia derivada de las condiciones reales de la institucionalidad estatal recibida, reformulando consecuentemente las prioridades a impulsar durante los primeros 100 días de gobierno. Estos ejes prioritarios se pueden agrupar en cuatro, en función de las similitudes de las prioridades establecidas:

- Sector estatal y estilo de gobierno: derogar fideicomisos lesivos a la economía; revisar, adecuar o cancelar las exoneraciones fiscales; recuperar empresas estatales (Empresa Nacional de Energía Eléctrica - ENEE y Hondutel); revisar contratos de energía; crear de la Secretaría de Planificación Económica y Desarrollo Social; impulsar las consultas populares

(democracia participativa); instalar, como se ha indicado, una comisión internacional contra la corrupción y la impunidad; eliminar la ley sobre las zonas de empleo y desarrollo económico (ZEDE), pasándolas al régimen especial existente como el de zonas libres; eliminar la ley de secretos oficiales; e incorporar científicos al desarrollo del país.

- Sector social: creación de empleos; no incrementar los impuestos; renegociar el estatuto del docente; garantizar el acceso gratuito a internet en las escuelas, colegios y universidades.

- Sector judicial: resolver jurídicamente los casos emblemáticos (relativos a los defensores ambientales); otorgar indultos para presos políticos; adoptar un nuevo código penal; reforzar la policía comunitaria.

- Sector ambiental: reforestación nacional.

Cuestiones como el combate a la pobreza y la reactivación económica son importantes, pero requieren la elaboración de las estrategias adecuadas, consensuadas entre diversos sectores e impulsadas con mucho dinamismo. Se trata, pues, de procesos que podrían llevar más de los 100 días establecidos como horizonte cercano.

En una situación similar, se presenta la relación entre partido y gobierno, que va de la mano con la relación entre poder ejecutivo y poder legislativo, y la relación entre presidenta del ejecutivo y coordinador del partido, el cual, además, es el esposo de la presidenta y, a su vez, expresidente del ejecutivo. La tensión entre pre-

sidenta entrante y presidente saliente se sienten con fuerza dado el contexto en el que se produjo la solicitud de extradición del expresidente Hernández por parte de Estados Unidos, la forma en que fue capturado, la asignación de un juez responsable de atender la extradición³ y las decisiones de la Corte Suprema de Justicia, cuyos titulares fueron incondicionales del mandatario, cuando este se encontraba en la plenitud de su poderío.

Lo interno y lo externo ocupa también un lugar importante en materia de tensiones, sobre todo cuando Centroamérica se ha convertido en área de interés para Estados Unidos, en particular por su inestable relación con los “países del Triángulo Norte”, fuente de migrantes y de actividad del narcotráfico. La visita de la vicepresidenta de Estados Unidos, de la jefa del Comando Sur y de otros funcionarios de la Administración Biden, muestran el interés de este país por construir o reconstruir una relación con Honduras, dadas sus complicadas relaciones actuales con El Salvador, Guatemala y Nicaragua. Nicaragua, más allá de la limitación geográfica contenida en la expresión “países del Triángulo Norte”.

La tensión entre el partido de gobierno y los demás partidos se expresa con mayor frecuencia en el Congreso Nacional, lo que advierte sobre situaciones conflictivas en el futuro inmediato, en particular cuando se requiera mayoría simple para tomar decisiones o mayoría calificada para asuntos más trascendentales, situación que será mucho más compleja. De igual manera, se produce una tensión en-

tre lo político y lo social que conduce a que algunos sectores sientan que la crisis del Congreso fue una especie de distractor que dejó de lado las necesidades apremiantes de la sociedad.

Retos del nuevo gobierno

A partir del contexto descrito se puede deducir con facilidad que la presidenta, el partido de gobierno, el Congreso Nacional y el sistema de justicia van a enfrentar muchos y variados retos que pondrán a prueba su habilidad para prevenir y enfrentar los brotes conflictivos y, si estos se producen, activar las iniciativas adecuadas para impedir que deriven en crisis. Quizás lo urgente sea definir los temas importantes a los que se dará la atención debida y constante en los próximos cuatro años y, de forma paralela, ir atendiendo las cuestiones urgentes que vayan surgiendo o que se hayan venido planteando en los últimos meses. De igual manera, se tendrán que ir definiendo las agendas comunes entre el poder ejecutivo y el poder legislativo; entre Estados Unidos y Honduras; entre gobierno y empresarios; y entre gobierno y sectores sociales, colocando como requisito indispensable el respeto a la independencia del otro.

Es importante destacar que existe una coincidencia tácita en las agendas del ejecutivo y el legislativo, en torno al plan de gobierno de LIBRE y sus aliados en la campaña electoral. Téngase en cuenta que el presidente del Congreso Nacional, y varios integrantes de la Junta Directiva que lo preside, pertenecen al PSH, el principal aliado de LIBRE en las elecciones anteriores. A ello se suma el intento del partido Liberal, otrora socio del partido Nacional, por marcar distancia con

³ Véase nota 1.



respecto al gobierno anterior, y el bajo perfil del propio partido Nacional ante la derrota electoral, así como el cuestionamiento nacional e internacional hacia el anterior mandatario y sus colaboradores cercanos. Lo anterior evidencia condiciones propicias para impulsar los cambios que el país necesita para revertir las deformaciones del anterior gobierno.

Retos políticos

En el ámbito político tienen que definirse cuestiones de país en torno a las que hay que avanzar con agendas precisas. Muchos de los asuntos importantes de la propuesta electoral deben concitar alianzas o acciones conjuntas que garanticen la pronta obtención de resultados. Inclusive pueden agruparse en torno a cinco puntos centrales: a) necesidades sociales (salud, educación, empleo, vivienda, defensa de los territorios, seguridad); b) sistema de justicia (impunidad, corrupción, narcotráfico, irrespeto a la ley, inseguridad jurídica y ciudadana, politización partidaria de las instituciones); c) servicios básicos (energía, agua, transporte, combustibles); d) recomposición de la visión del Estado y del estilo de hacer política; y e) ejes del desarrollo (ZEDES, reactivación económica, etc.). Para atender los retos anteriores deben definirse o redefinirse las siguientes relaciones: al interior del partido de gobierno; entre partido y gobierno; entre los poderes ejecutivo y legislativo; y entre partido de gobierno y los demás partidos, vis a vis.

Retos económicos

Los retos económicos están incluidos en la sección anterior de promover acuerdos políticos en torno a ellos. Estos retos deben ser asumidos como acciones urgentes

y los mencionados apuntan a la metodología para enfrentarlos, al cómo concitar alianzas y establecer fuentes de financiamiento y plazos para cumplirlos. Dado el alto nivel de endeudamiento interno y externo, y el saqueo de los fondos del Estado legados por la administración anterior —además de la asfixiante situación económica derivada del impacto de las restricciones de la pandemia en la vida laboral y familiar—, las iniciativas relacionadas con estos retos deben orientarse por una visión de largo, mediano y corto plazo, y procurar los acercamientos necesarios para trabajar con otros sectores en la búsqueda de las soluciones que el país demanda.

Retos sociales

Un hecho central para comprender la dimensión de los retos sociales —y económicos— del país, es el referido a la forma en que ha evolucionado la pobreza en Honduras. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ya señalaba en 2020 en su *Panorama social de América Latina*, que Honduras presentaba en 2019 la peor situación social con un índice de pobreza de 55,8%, (más de cinco millones de hondureños), casi el doble del promedio de la región. Superaba a México, con un 41,5%, y a Bolivia, con un 33,2%. De igual manera, el Instituto Nacional de Estadística (INE) en su *Encuesta Permanente de Hogares* estimó que, en julio de 2021, el 73,6% de los hogares hondureños se encontraba en situación de pobreza y el 53,7% en pobreza extrema, situación que ponía en evidencia al gobierno del partido Nacional que controlaba el país desde 2010.

En Honduras, como en otros países, la pandemia ha manifestado la fragilidad del sistema de salud y los graves problemas en educación. En el país esto tiene un antecedente digno de considerar: el presidente saliente impulsó un proyecto político basado en la militarización de la seguridad y de otras instancias estatales de naturaleza civil, lo que produjo un desbalance en el presupuesto y la atención del Estado a la inversión en seguridad y defensa, por un lado, frente a la inversión en desarrollo (económico y social) por el otro. Esto plantea un reto urgente e importante: revertir el desbalance y comenzar a destinar más recursos al desarrollo y menos a seguridad y defensa. Esto es importante para empezar a atender las necesidades sociales más apremiantes de la población referidas a salud, educación, empleo, vivienda y seguridad.

Retos en política exterior

En Honduras hay tres asuntos de alta sensibilidad política y social que deben que ser trabajados en el plano interno e internacional: narcotráfico, migración y corrupción. Con Estados Unidos hay coincidencia total en los dos primeros, pero coincidencia a medias en el tercero; esto es así porque la preocupación por la corrupción es común en el momento en que afecta a la seguridad de Estados Unidos, al igual que, particularmente, lo hace el narcotráfico, cuya gestión, además, drena en Honduras recursos destinados a satisfacer necesidades básicas de la población, disminuyendo su atención y convirtiéndose en un factor de expulsión de migrantes. La lucha contra el narcotráfico fue un punto de colaboración entre el exmandatario Juan Orlando Hernández y el expresidente Donald Trump, lo cual se tradujo

en una lucha contra los otros narcotraficantes, manteniendo cierta impunidad sobre la propia actividad ilícita de la cual se acusa hoy al primero. Esta colaboración de combate al narcotráfico trae consigo un asunto muy sensible: el involucramiento de militares hondureños en esta tarea que es estrictamente policial y judicial. En la experiencia de la colaboración citada, el involucramiento se produjo a través de la fuerza del ejército y, según se percibe, la actual va a girar a través de la fuerza aérea, la más profesional de las fuerzas armadas.

La migración, por su parte, fue objeto de negociación entre Estados Unidos y los países del Triángulo Norte (Guatemala, El Salvador y Honduras), y se ubicó en la agenda de seguridad cuando debió colocarse en la agenda del desarrollo. Lo anterior se tradujo en la ubicación de militares y policías como actores clave en la contención de la migración a lo largo de la ruta del migrante, que inicia desde la frontera de Honduras y Guatemala hasta la frontera de México con Estados Unidos, pasando por la frontera entre Guatemala y México. La situación, llevada al extremo, hizo que las caravanas de migrantes que salían de Honduras se toparan con militares y policías que les impedían salir del país, en tanto en los otros países les impedían continuar.

La inserción de la migración en la agenda del desarrollo parte, en cambio, del reconocimiento de que las personas se van porque no encuentran en su país de origen las condiciones básicas para vivir, conseguir empleo y tener acceso a salud, educación, o seguridad social, entre otras. Por tanto, desde este punto de vista, la solu-



ción es crear esas fuentes en el país gracias a una buena inversión en desarrollo, con fuertes controles para eliminar o reducir sustancialmente la corrupción que pueda repercutir negativamente en el impacto sobre dicha inversión. Este es un punto en común con los intereses de Estados Unidos, que propicia la inversión en áreas estratégicas que terminarían reduciendo la migración hacia ese país.

El combate a la corrupción puede llevar a conseguir apoyo internacional de Estados Unidos y/o de organismos internacionales para instalar en Honduras, como se ha mencionado, una comisión de apoyo en la lucha anticorrupción similar a la MACCIH, que se instaló con apoyo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), o a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CI-CIG), que se instaló con el apoyo de Naciones Unidas. De esta manera ambos países saldrían ganando.

El establecimiento de relaciones con China continental es una cuestión que queda pendiente, pese a haberse proclamado como prioridad en la campaña electoral del partido LIBRE. Es natural pensar que, al establecer alianzas electorales, los participantes terminen haciendo recortes en algunos temas, y este es uno que se pospondrá algún tiempo, en tanto China se dispone a intensificar su financiamiento en algunos rubros y Estados Unidos se dispone a hacer lo mismo para compensar la relación de Honduras con China.

Las relaciones con el resto de los países de Centroamérica se encuentran en un momento de cierta lejanía. La relación con Guatemala se mantiene fría. Con El

Salvador hay una cierta coincidencia, derivada quizás de las fuertes críticas de su presidente hacia el expresidente Hernández, y de la colaboración de este con varios alcaldes hondureños al proporcionarles vacunas contra la COVID-19 en momentos de muchas dificultades en el país para conseguirlas. Resulta así oportuno destacar que, pese a no existir un acercamiento oficial entre los gobiernos de Honduras y El Salvador, los alcaldes de las principales ciudades del país, Tegucigalpa y San Pedro Sula, se preparan para recibir y rendir homenaje al presidente Nayib Bukele por, como se ha indicado, la ayuda que brindó a varias municipalidades del país en los momentos de mayor necesidad de vacunas contra la COVID-19.

Con Nicaragua, la anterior relación cercana se ha enfriado bastante, sin llegar al punto de condenar o romper por la grave situación de la gobernabilidad en ese país. La situación es de una discreta lejanía, que no llega a la condena por las irregularidades político-electorales cometidas ni por el desprestigio nacional e internacional en el que se ha sumido por las violaciones a los derechos humanos de los críticos y opositores. Pero tampoco llega, ni va a llegar en el futuro cercano, a una cercanía que derive en un posicionamiento común en materia regional e internacional. La cercanía de Estados Unidos y los intereses en juego, entre ellos el establecimiento de relaciones de esos dos países con China, puede actuar como un elemento disuasivo coyuntural.

Retos ambientales

Honduras presenta una vulnerabilidad extrema hacia fenómenos de la naturaleza

—huracanes, tormentas tropicales— que se traducen en inundaciones constantes a escala nacional, particularmente en la zona norte del país. La llegada en 2021 de los huracanes Eta e Iota, derivados en tormentas tropicales, provocaron importantes inundaciones con el consecuente saldo de familias damnificadas. Estas se vieron obligadas a moverse territorialmente en condiciones adversas, que terminaron agravando su situación de pobreza y extrema pobreza, y su vulnerabilidad ante el azote de la pandemia por la COVID-19. Las fuertes corrientes arrasan con los bordes de los ríos y provocan inundaciones que dejan indefensas a muchas familias que viven en sus inmediaciones, en un fenómeno que se repite todos los años sin que se desarrollen medidas de prevención, mitigación, control y respuesta rápida.

Lo anterior se suma al grave proceso de deforestación de miles de hectáreas que provoca deslaves de tierra, maleza y troncos de los cerros por causa de las lluvias y la inexistencia de árboles que sirvan de contención. A este deterioro ambiental, se agrega la contaminación de ríos y lagos por los vertederos de desechos provenientes de explotaciones mineras cercanas; el agua y el bosque quedan afectados a causa de un extractivismo irracional. La lucha contra la explotación minera que llevan a cabo los defensores ambientales, llevó al gobierno de Hernández a criminalizarlos, impulsando actividades de control represivo (por medio de militares y policías), control judicial (a través de instituciones, leyes y procedimientos) y control ideológico (sirviéndose de los medios de comunicación corporativos y las iglesias evangélicas), que terminaron

con muchos defensores muertos, presos o con procesos pendientes. Una de las medidas más esperadas del nuevo gobierno se ha concretado en los primeros días, al aprobarse en el Congreso Nacional una amnistía que ha puesto en libertad a varios defensores ambientales, poniendo punto final al contubernio de jueces, policías militares y empresas mineras.

Reformas necesarias

El desmontaje de la estructura de impunidad, corrupción y narcotráfico típico del mandatario anterior y la asunción de los retos políticos, económicos, sociales y ambientales que demanda la sociedad, requerirá de muchas iniciativas reformistas del poder legislativo y del ejecutivo. De ahí la necesidad de consolidar una fuerza política en el Congreso para aprobar con cierta rapidez las medidas necesarias que puedan crear, derogar o reformar leyes vigentes. Las iniciativas urgentes para atender las reformas que el país necesita pueden girar en torno a los ejes a los que se ha hecho referencia:

- Necesidades sociales: salud, educación, empleo, vivienda, defensa de los territorios, seguridad.
- Sistema de justicia: lucha contra impunidad, corrupción, narcotráfico, irrespeto a la ley, inseguridad jurídica y ciudadana, politización partidaria de las instituciones.
- Servicios básicos: energía, agua, transporte, combustibles.
- Recomposición de la visión del Estado y del estilo de hacer política.



- Ejes del desarrollo: eliminación de las ZEDES, reactivación económica.

En torno a ellas surgen otras reformas secundarias, no por ello menos importantes, como la eliminación de la ley de secretos, el futuro de la tasa de seguridad; la eliminación de la ley antiterrorista, en tanto la asocia con las protestas sociales; modificaciones al código penal, la ley electoral y otras, algunas de las cuales se encuentran en proceso de aprobación.

Posibilidades, obstáculos y opciones

Pese a la transición caótica que está viviendo el país, se abre una etapa llena de posibilidades y esperanzas para impulsar los cambios que el país requiere para enfrentar los grandes retos políticos, económicos, sociales y ambientales.

Tres factores son importantes para sustentar esta afirmación: a) hay voluntad política de la presidenta de la República y de su partido para impulsar los cambios que el país necesita, incluidos los diputados disidentes de LIBRE; b) existe una voluntad política similar, aunque no exenta de posibles conflictos, de parte del PSH, el partido que se incorporó a la alianza con LIBRE para ganar las elecciones, que cuenta con 10 diputados en el Congreso y con el presidente de la Junta Directiva del mismo; c) hay disposición de los otros partidos representados en el Congreso Nacional, particularmente del Nacional y del Liberal, para impulsar las reformas ante la crisis de legitimidad que presentan por la derrota electoral, el desastre de país que entregan y el desprestigio de un presidente señalado por corrupción y narcotráfico.

Pese a lo anterior, podemos ver que, aunque bastante discretos, los sectores que apoyaron la creación de la estructura de impunidad y corrupción en la que sustentó su poderío el presidente saliente siguen fuertes. Están ahí, en la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público, en los medios de comunicación corporativos, la empresa privada, las iglesias evangélicas y la máxima autoridad eclesiástica de la iglesia católica. No obstante, su poder de influencia se ha visto disminuido por la legitimidad con que asumió la presidenta Xiomara y por la aceptación internacional que su triunfo ha tenido, en particular de Estados Unidos.

Conclusiones

- La salida del poder del expresidente Juan Orlando Hernández y la derrota electoral del partido Nacional que lo apoyó hasta el último momento, abre el inicio de una nueva etapa para Honduras, llena de esperanza y optimismo por la posibilidad de revertir todo lo malo y construir progreso para el país.
- La presidenta Xiomara llega al gobierno con una gran legitimidad política y social, a nivel interno, y una gran aceptación internacional, lo que le permite conducir con bastante prestigio y solvencia el proceso de reversión de la herencia negativa, antes de iniciar la tarea de construir su oferta de campaña.
- La presidenta y su partido tienen un año para asumir los retos políticos, económicos, sociales y ambientales e impulsar los cambios prometidos; así como para impulsar las reformas que requieren del apoyo de otros sectores políticos y sociales. Por tradición, en el segundo año se institucionaliza el proceso y las fuerzas políticas comienzan a reacomodarse en torno a otros liderazgos.
- Aunque debilitada por el fracaso del partido Nacional y toda su estructura, la red de cómplices que sostuvo a Juan Orlando Hernández en el poder sigue ahí, esperando el momento para boicotear el proceso de cambio. De ahí la importancia de empezar con los cambios ahora, cuando mantienen un bajo perfil.
- Honduras necesita construir una red de apoyo político y financiero internacional para salir adelante con su proyecto en circunstancias de grave deterioro presupuestario y un elevado nivel de endeudamiento que podría frustrar las esperanzas de una sociedad que ya había llegado al límite luego de tantos años de indignación e indefensión.

Referencias bibliográficas

EQUIPO DE INVESTIGACIÓN CEDOH (2020): “¿A dónde va Honduras? Tendencias y perspectivas en un contexto de crisis”, Honduras, Centro de Documentación de Honduras.

— (2021): “Impacto social y político de la manipulación partidaria de los programas asistenciales del Estado”, Honduras, Centro de Documentación de Honduras.

— (2021): “La compra de votos y la deformación del quehacer político partidario”, Centro de Documentación de Honduras: Honduras, 2021.

FLORES, M. (2021): “Necesidades básicas, asistencialismo y clientelismo político- electoral”, Honduras, Centro de Documentación de Honduras.

ROMERO, R., FLORES, M. y otros (2020): “Honduras: Gobernabilidad, insatisfacción ciudadana y desafíos democráticos”, Honduras, Centro de Documentación de Honduras.

Fundación Carolina, marzo 2022

Fundación Carolina
Plaza del Marqués de Salamanca nº 8
4ª planta, 28006 Madrid - España
www.fundacioncarolina.es
[@Red_Carolina](https://twitter.com/Red_Carolina)

https://doi.org/10.33960/AC_06.2022

La Fundación Carolina no comparte necesariamente las opiniones manifestadas en los textos firmados por los autores y autoras que publica.



Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento- NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)